

Venezuela en la encrucijada



Tiempo de lectura: 6 min.

[Antonio de la Cruz](#)

El problema

La reanudación de relaciones entre el Fondo Monetario Internacional y Venezuela abre el acceso potencial a cerca de 5.000 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG), pero lo hace en un contexto de profunda debilidad institucional y sin garantías claras de gobernanza.

El contexto

La administración de Delcy Rodríguez ha logrado un reconocimiento funcional por parte de la administración Trump, suficiente para reactivar canales técnicos con el FMI, pero insuficiente para consolidar legitimidad institucional. Esta ambigüedad crea una zona gris donde el financiamiento puede fluir sin que existan mecanismos sólidos de control y rendición de cuentas.

La solución

Para evitar que estos recursos se conviertan en un instrumento de captura política por parte de Delcy Rodríguez, el financiamiento debe estar condicionado a una transparencia sustancial, supervisión multilateral efectiva y reformas institucionales verificables, asegurando que la estabilización económica no sustituya la reconstrucción del Estado democrático.

Estabilizar no es reconstruir

La reanudación de relaciones entre el Fondo Monetario Internacional y Venezuela marca un punto de inflexión geopolítico y financiero con implicaciones que trascienden las fronteras del país. Después de casi dos décadas de aislamiento, Venezuela regresa al sistema económico internacional bajo el liderazgo de Delcy Rodríguez, lo que abre la posibilidad de acceder a financiamiento, asistencia técnica y a los Derechos Especiales de Giro asignados en 2021 para enfrentar la crisis económica sin precedentes provocada por la pandemia de covid-19. Este movimiento, sin embargo, no debe interpretarse únicamente como una señal de recuperación, sino como la apertura de una nueva fase de tensiones entre estabilización económica y legitimidad institucional.

El regreso al sistema: técnica vs política

Desde una perspectiva de economía política global, Venezuela representa hoy un caso límite: un país que podría acceder nuevamente a liquidez internacional sin haber resuelto los problemas estructurales que provocaron su colapso. Esta desconexión entre financiamiento externo y calidad institucional interna plantea un desafío directo a los fundamentos del multilateralismo financiero. El sistema internacional, diseñado para promover estabilidad con condiciones, se enfrenta aquí a la posibilidad de estabilizar sin transformar.

El retorno del FMI no constituye, en sentido estricto, una validación política del gobierno en ejercicio, sino una decisión técnica basada en el reconocimiento de facto por parte de la mayoría de los países miembros. Sin embargo, esta distinción es frágil. En la práctica, la reactivación de consultas macroeconómicas, la recopilación de datos oficiales y la eventual negociación de programas de financiamiento implican una forma de legitimación funcional. Para Delcy Rodríguez, esto representa una oportunidad estratégica: convertir el reconocimiento técnico en capital político. Para el FMI, en cambio, supone un riesgo reputacional significativo.

El dilema del financiamiento: liquidez sin gobernanza

El problema central no es el acceso al financiamiento, sino el contexto en el que ese financiamiento será utilizado. La experiencia histórica demuestra que en entornos institucionales débiles, los flujos de liquidez internacional pueden derivar en resultados profundamente divergentes. En el mejor de los casos, pueden catalizar reformas estructurales; en escenarios intermedios, pueden generar estabilización sin transformación; y en el peor, pueden convertirse en instrumentos de captura por parte de élites políticas. Venezuela se encuentra hoy peligrosamente cerca de este último escenario.

El país enfrenta una combinación compleja de deuda externa elevada —mas de 180.000 millones de dólares—, instituciones estadísticas debilitadas, un banco central sin credibilidad —monetización del déficit fiscal— y una economía altamente dependiente del petróleo —más de 70% de las divisas—. En este contexto, los DEG, concebidos como un instrumento de liquidez global durante la pandemia, corren el riesgo de ser utilizados más como una herramienta de supervivencia política que como un mecanismo de estabilización macroeconómica. La ausencia de controles robustos amplifica este riesgo.

El modelo emergente: el Estado tutelado

Lo que emerge en Venezuela no es una transición democrática convencional, sino una configuración híbrida que puede describirse como un “Estado tutelado”. En este modelo, el control externo —ejercido por actores como Estados Unidos y organismos multilaterales— coexiste con la operación interna de un gobierno que mantiene el control administrativo del aparato estatal. El resultado es una legitimidad fragmentada, donde el reconocimiento parcial de la Casa Blanca no se traduce en un mandato político sólido, pero sí en capacidad operativa.

Este tipo de arreglo permite estabilizar ciertas variables macroeconómicas sin abordar el problema fundamental de la institucionalidad. Desde la teoría económica institucional, esto genera una trampa: la estabilización reduce la urgencia de las reformas. A medida que disminuyen la inflación y la volatilidad cambiaria, y aumentan los flujos de divisas, los incentivos para transformar el sistema político se debilitan. Se configura así un equilibrio subóptimo, en el que hay suficiente estabilidad para evitar el colapso, pero no la suficiente transformación para sostener el crecimiento por la falta de legitimidad.

El rol de Estados Unidos: arquitectura de poder

El papel de la administración Trump es central en esta dinámica. Tras la captura de Nicolás Maduro mediante una operación militar y de inteligencia de gran escala, Washington ha optado por una estrategia pragmática que busca preservar la estabilidad del sistema frente al riesgo de fragmentación interna generando caos. Esta estrategia combina el levantamiento selectivo de sanciones, el control indirecto de flujos financieros a través de las licencias OFAC y el apoyo a la reintegración multilateral. El objetivo no es la democracia, sino la construcción de un sistema funcional bajo condiciones controladas. Venezuela se convierte así en un nodo dentro de una arquitectura de poder más amplia que incluye consideraciones de seguridad energética, competencia geopolítica y estabilidad regional.

Riesgos sistémicos: el precedente para el FMI

Para el Fondo Monetario Internacional, el caso venezolano plantea un dilema profundo. Si el organismo facilita el acceso a recursos sin exigir reformas institucionales verificables, corre el riesgo de sentar un precedente que debilite la credibilidad de la condicionalidad. El mensaje implícito sería que es posible reinsertarse en el sistema financiero internacional sin resolver problemas de gobernanza. Esto tendría implicaciones globales, especialmente en un contexto donde múltiples economías emergentes enfrentan desafíos institucionales similares.

Escenarios futuros: entre reforma y captura

El futuro de Venezuela dependerá de cómo se resuelva esta tensión entre financiamiento y gobernanza. Existen distintos escenarios posibles, pero todos giran en torno a una variable clave: el grado de control y supervisión sobre los recursos. Un escenario de reformas estructurales sostenidas parece poco probable en el corto plazo, dadas las dinámicas políticas internas. Más plausible es una estabilización controlada, donde el acceso limitado a financiamiento mejora ciertos indicadores macroeconómicos sin alterar las bases del sistema. El riesgo más alto es el de captura, en el que los recursos se utilizan para consolidar estructuras de poder existentes, reproduciendo el ciclo de crisis.

Recomendaciones: evitar la captura

Evitar este desenlace requiere condiciones exigentes. La transparencia debe ser esencial, con datos económicos verificables y auditorías independientes. La supervisión multilateral debe ser reforzada, con mecanismos claros de condicionalidad y reversibilidad. Y, sobre todo, el financiamiento debe estar

vinculado a reformas institucionales concretas, incluyendo la independencia del Banco Central, la reforma del sistema judicial y el fortalecimiento de las capacidades estatales.

Conclusión: el verdadero campo de batalla

El caso venezolano ilustra una verdad fundamental sobre las economías en crisis: el acceso a recursos puede estabilizar, pero no puede reconstruir instituciones. La diferencia entre una recuperación sostenible y una recaída no depende del volumen de financiamiento, sino de quién lo controla y bajo qué reglas. En ausencia de Estado de derecho, el dinero no transforma sistemas; los perpetúa.

En este sentido, Venezuela no es solo un caso nacional, sino un laboratorio global. Su evolución pondrá a prueba la capacidad del sistema multilateral para equilibrar pragmatismo y principios. El desenlace aún está abierto, pero el riesgo es claro: una estabilización sin instituciones sólidas puede ser, en última instancia, otra forma de inestabilidad diferida.

<https://lapatilla.com/2026/04/22/antonio-de-la-cruz-venezuela-en-la-encrucijada/>

[ver PDF](#)

[Copied to clipboard](#)